



El clan del gobernador de Tamaulipas

(Alejandro Caballero, pág. 8-11)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por lavado de dinero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y cinco miembros prominentes de su familia.

Los integrantes de su círculo familiar que habrían incurrido en actividades “constitutivas de delitos” son: su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael (actual senador) y José Manuel; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Watterbarger y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.

También forma parte de la denuncia la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL, de la que son accionistas el gobernador, su esposa, su mamá, su hermano Ismael y la esposa de éste, Evelyn Aimee Rodríguez Garza.

Igualmente son incluidos en el documento los socios del mandatario: Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, así como la empresa de este último, Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV.

La denuncia presentada en julio pasado y dirigida a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, está basada principalmente en información con que cuenta la UIF, pero también en reportes de su similar en Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero.

De acuerdo con el documento firmado por Nieto Castillo, del que Proceso tiene copia, los denunciados “han incurrido posiblemente en delitos relacionados con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude”.

Por lo pronto la UIF solicitó a la FGR ordenar el aseguramiento de 14 cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, cuatro de su esposa, cuatro de su hermano y senador Ismael García, seis de su hermano José Manuel, 11 de su madre y 20 de su suegro.

También requiere que se congelen nueve cuentas de Tamez Arellano y una más de Reséndez Cantú, socios del gobernador tamaulipeco. De igual manera solicita se aseguren dos cuentas de la Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y ocho de la Inmobiliaria RC de Tamaulipas.



El martes 1 el portal de Proceso dio a conocer que la UIF alista otra denuncia penal distinta a la presentada en julio contra el mismo García Cabeza de Vaca, su familia y algunos de sus colaboradores, por los delitos de desvío de recursos públicos y defraudación fiscal, entre otros.

Las letras chiquitas de la vacunación

(Juan Omar Fierro, pág. 14-16)

Tres grandes grupos farmacéuticos de carácter internacional serán los primeros en abastecer de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 al mercado mexicano a partir de diciembre, pero las primeras 250 mil dosis sólo alcanzará para inmunizar a una tercera parte del personal sanitario que labora en los hospitales públicos del país.

El primer lote llegará a México en un momento crítico. El viernes 4 se reportaron 12 mil 127 nuevos contagios, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. En este contexto, desde su conferencia matutina López Obrador hizo un inusual llamado a resguardarse en la temporada navideña y a no realizar fiestas o celebraciones familiares, evitando también las compras multitudinarias.

En noviembre último el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión inicial de 35 mil 153 millones de pesos para la compra de los primeros lotes de vacunas a los consorcios encabezados por las empresas AstraZeneca, Pfizer BioNTech y CanSino Biologics, con los cuales pretende adquirir 198.3 millones de dosis.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó entonces que esa dependencia pagó en octubre pasado un anticipo de 159 millones de dólares por estos acuerdos de precompra a los que se sumaron 92 millones de dólares en noviembre, mientras que en diciembre de este año nuestro país deberá entregar un tercer pago de 68 millones de dólares.

Sin embargo, un especialista de la UNAM advierte que la cifra de 198 millones de dosis no equivale a una dosis por persona, puesto que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca requieren de dos aplicaciones por individuo para producir la respuesta inmune que neutraliza el ataque del nuevo coronavirus.

El titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jorge Baruch Díaz Ramírez, advierte que las primeras 250 mil dosis de la vacuna de Pfizer tendrán que distribuirse entre 495 mil 704 personas que trabajan en los hospitales públicos del país, por ser quienes corren mayor riesgo tras ocho meses de batalla contra el covid-19.



De ese grupo al menos 190 mil 565 son médicos generales, residentes y especialistas; seis mil 600 son médicos contratados por el Instituto de Salud para el Bienestar para atender la emergencia; 286 mil 239 son enfermeros generales y 12 mil 300 enfermeras especializadas en covid-19, por lo que apenas una tercera parte de ellos podría recibir las dos dosis que requiere la vacuna de Pfizer para funcionar.

A esta cifra, señala Baruch, se debe sumar el personal de limpieza que sanitiza los hospitales y que también está altamente expuesto a la nueva enfermedad, así como el personal administrativo y de logística que hace posible la operación de los hospitales, lo que pone en evidencia que “es todavía muy baja” la oferta de vacunas para el personal sanitario en medio de la emergencia.

La urgencia de vacunar al personal de salud también se desprende de la alta mortalidad que tiene México entre su personal sanitario. Baruch agrega que “hay un alto número de muertes acumuladas entre personal de salud”.

Hasta el 4 de noviembre último, más de 140 mil médicos y enfermeros se habían contagiado de covid-19, de los cuales mil 884 murieron tras infectarse. Además, existe el registro de otras 198 defunciones sospechosas de haber sido causadas por la nueva enfermedad.

“Son más de dos mil defunciones acumuladas, lo que nos coloca en los primeros lugares de mortalidad de personal sanitario en el mundo”, lamenta.

CDMX: Una Navidad en semáforo naranja... casi casi rojo

(Sara Pantoja, pág. 24-26)

Con la mayor parte de su actividad económica abierta, la Ciudad de México roza las 18 mil defunciones confirmadas por covid-19, mantiene una ocupación hospitalaria de 56.2% y se enfila para alcanzar el pico más grave en camas de hospital, similar al que tuvo en mayo pasado, cuando se decretó el semáforo epidemiológico rojo y la ciudad prácticamente se cerró.

Esa alerta de riesgo pone a la capital en una posición de extrema vulnerabilidad económica que no existía hace siete meses: más de 200 mil empleos formales no recuperados, alrededor de 34 mil 500 micro y pequeños negocios quebrados, millones que sobreviven del comercio informal y están endeudados.

Mientras, el gobierno local está debilitado en sus finanzas por la caída de 8% de sus ingresos y se verá obligado a disminuir 21 mil millones de pesos el presupuesto para 2021.



Frente a este escenario, el viernes 4 la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, “estiró” el semáforo naranja por vigesimocuarta semana consecutiva –desde el pasado 29 de junio– y tercera semana con “alerta al límite”. Renuente a regresar al rojo, por los “graves efectos” económicos que significarían para la capital, aunque reiteradamente se ha negado a dar cifras puntuales, retomó el llamado inicial a “quedarse en casa” y restringió “al mínimo” la operación del gobierno local y los organismos autónomos, así como de la iniciativa privada, entre otras disposiciones que había cuando la CDMX estaba en rojo.

La medida llega para tratar de revertir el hecho de que las calles de la capital están de nuevo llenas de gente que sale a pasear en familia, que hace largas filas para aprovechar el remate de mercancía en tiendas que se retiran del país, que se va a celebrar bodas o quince años al Estado de México o a Morelos o que simplemente usan el cubrebocas de manera incorrecta y no guardan la sana distancia.

Y al mismo tiempo, regresan las historias –de viva voz, en las redes sociales y en la prensa–, de personas que buscan en uno, dos o tres hospitales una cama para un familiar que ya no puede respirar y encuentran la misma respuesta: “Ya no hay cupo”.

Desde principios de octubre la mandataria morenista destacó que había “ligeros” aumentos en las hospitalizaciones. Sin embargo, el 12 de noviembre informó que la tendencia en la CDMX cambió “con un incremento muy importante día con día” y se acercaba más al semáforo rojo.

Al día siguiente advirtió que si seguía esa tendencia, para principios o finales de diciembre “estaríamos de nuevo en una situación como la de mayo”. Dos semanas después, el 27, “recorrió” su estimación al decir que los niveles de mayo se alcanzarían a principios de enero de 2021.

Pero sus informes oficiales tienen otros datos. De acuerdo con el reporte epidemiológico que Sheinbaum ofreció el mediodía del viernes 4, la CDMX tenía una ocupación hospitalaria de 56.2%, con 3 mil 917 personas hospitalizadas, de las cuales 3 mil 19 estaban en camas de atención general y 898 en camas con intubación. En siete días 285 personas más ingresaron al hospital.

Una cifra similar ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando el reporte oficial fue de 3 mil 903 personas hospitalizadas –solo 14 menos que en la actualidad–, de las cuales 2 mil 979 estaban en atención general y 932 intubadas, según la página de Datos Abiertos de la CDMX.



Sólo ocho días después –el 20 de mayo–, la capital llegó a su máximo número de hospitalizados en lo que va de la pandemia: 4 mil 540 personas, de las cuales 3 mil 429 estaban en atención general y mil 111 con ventilador artificial. Ese día la morenista presentó su Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y adelantó que la CDMX estaría en rojo hasta el 15 de junio.